

Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que con fecha 4 de enero de 2025, comparece José Ignacio Pinochet Olave, abogado, Director de Asesoría Jurídica, en representación de la I. Municipalidad de Santiago, interponiendo recurso de reclamación conforme al artículo 85 de la Ley N°20.529, en contra de la Superintendencia de Educación Metropolitana, representada por don Mauricio Farías Arenas, por haber dictado la Resolución Exenta PA N°1464 de 16 de diciembre de 2024, que acogió parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por la actora, y que confirmó la sanción de privación parcial y temporal de subvención general impuesta al establecimiento educacional Manuel Barros Borgoño, cuyo sostenedor es la reclamante, actuación que considera ilegal y desproporcionada, por aplicar una sanción excesiva en relación a la entidad de la infracción, vulnerando con ello el principio de proporcionalidad que debe regir las actuaciones de los órganos administrativos sancionadores.

Expone que el procedimiento administrativo se inició mediante acta de fiscalización N°221304380 de 22 de diciembre de 2022, por denuncias CAS-11365 de 29 de abril de 2022 y CAS-13212 de 17 de mayo de 2022. Posteriormente, se remitió al Fiscalizador, mediante Ord. N°124, evidencias de subsanación, levantándose Acta de Observaciones no subsanadas N°221304380 y dictándose la Resolución Exenta N°2022/PA/13/3164 de 28 de diciembre de 2022, mediante la cual se ordenó instruir el procedimiento administrativo.

Posteriormente, por Resolución N° 2023/FC/13/0129 de 8 de febrero de 2023, se formularon tres cargos, de los cuales el recurrente se refiere a dos de ellos, por cuanto el tercero fue sobreseído por la autoridad regional.

Refiere que el Cargo N°1, fue aplicado por *“no acreditar el establecimiento educacional contar con el personal docente suficiente para sus estudiantes; y el Cargo N°2, por la siguiente causal: “el establecimiento educacional no cuenta con servicios higiénicos en condiciones adecuadas de funcionamiento.”*

Sostiene que presentó descargos mediante ORD. N°46 de 1 de marzo de 2023, explicando respecto al Cargo N°1, que el docente Sr. Luis Farfán Valdebenito contaba con horas disponibles para realizar el reemplazo, acreditando su idoneidad profesional. En cuanto al Cargo N°2, manifestó haber



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QWXJXTZRSKL

subsano las observaciones realizadas por la Superintendencia, mejorando las condiciones sanitarias e higiénicas del establecimiento.

Agrega que, no obstante lo anterior, mediante Resolución Exenta N°2023/PA/13/3173 de 24 de octubre de 2023, la Superintendencia desestimó los descargos, aplicando una sanción de privación parcial y temporal de la Subvención General mensual de 1% por tres meses por los cargos N°1 y N°2, declarando prescrito el cargo N°3.

Frente a ello, interpuso reclamación del artículo 84 de la Ley N°20.529 mediante ORD N°243 de 29 de noviembre de 2023, argumentando que: i) se acompañaron evidencias de que el docente se desempeñaba en funciones relacionadas con el CRA (sic) contando con 25 horas; ii) el docente ya no es dependiente de la Municipalidad por haber cumplido requisitos para su retiro; iii) por tratarse de una infracción grave, sólo podía ser sancionada mediante amonestación y multa; y iv) existían circunstancias atenuantes de responsabilidad.

Respecto al Cargo N°2, sostuvo que las puertas de los servicios higiénicos ya contaban con los pestillos correspondientes, por lo que la infracción debía calificarse como leve, y además la facultad de sancionar se encontraba prescrita, toda vez, que el plazo habría empezado a correr a más tardar el 29 de abril de 2022, según “CAS-11365 de 29 de abril de 2022 y según CAS-13212 de 17 de mayo de 2022” (sic), de modo que habría vencido el 29 de octubre y el 17 de mayo de 2022 respectivamente, conforme lo previsto en el artículo 86 de la Ley N° 20.529.

Argumenta que la resolución recurrida infringe el principio de proporcionalidad, pues no consideró los aspectos señalados en el artículo 73 letra b) inciso 2° de la Ley N°20.529 al determinar la sanción a aplicar, como el beneficio económico obtenido, la intencionalidad, las circunstancias atenuantes y agravantes, el daño causado y otros factores relevantes.

Solicita se declare la ilegalidad y desproporcionalidad de la sanción, dejándola sin efecto por contravenir la norma constitucional del deber de proporcionalidad aplicable a los órganos administrativos sancionadores.

**Segundo:** Que la Superintendencia de Educación informa exponiendo los antecedentes del procedimiento administrativo que dio origen a la sanción recurrida, solicitando el rechazo de la reclamación judicial.



Detalla cronológicamente el iter administrativo, indicando que el procedimiento se inició mediante el levantamiento de un Acta de Denuncia de 5 de diciembre de 2022, seguido de un Acta de Seguimiento de 22 de diciembre del mismo año, que constató hechos no subsanados constitutivos de infracción a la normativa educacional. Posteriormente, se dictó la Resolución Exenta N°2022/PA/13/3164 de fecha 28 de diciembre de 2022, ordenando la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio, formulándose cargos mediante Acto Administrativo N°2023/FC/13/0129 de 8 de febrero de 2023.

Explica, respecto al Cargo N°1, sobre establecimiento educacional que no acredita contar con personal docente suficiente para sus estudiantes, que se constató que el liceo no presentó orden de trabajo que evidenciara que el profesor reemplazante contaba con horas de aula disponibles para realizar dicha función, configurándose una infracción a lo dispuesto en el artículo 10 letra f) inciso segundo, y artículo 46 letra g) del DFL N°2 de 2009 del Ministerio de Educación, y al Capítulo 9.1 letra g), y 31.2 de la Circular N°1 de la Superintendencia de Educación.

Añade, en cuanto al Cargo N°2, referente a servicios higiénicos en condiciones inadecuadas de funcionamiento, se verificó que el establecimiento no acreditó haber subsanado todas las deficiencias constatadas, infringiendo el artículo 13 del Decreto N°289 de 1989 y el artículo 22 del Decreto N°594 de 1999, ambos del Ministerio de Salud, por cuanto, no solo se detectó la falta de cierres o pestillos en los cubículos de los servicios higiénicos, sino también la falta de un lavamanos, un espejo y rayados grafitis en el baño principal, y en el baño de urinarios, la falta de una llave del lavamanos y un lavamanos, además del mal estado de la cerámica que los recubre.

Rechaza la alegación de prescripción formulada por el sostenedor, argumentando que respecto al Cargo N°1, el plazo comenzó a correr desde la fecha en que el fiscalizador constató el hecho infraccional, 22 de diciembre de 2022, mientras que para el Cargo N°2, desde la fecha del acta de fiscalización, también en diciembre de 2022. En ambos casos, la notificación de la resolución que ordenó instruir el procedimiento administrativo se practicó el 29 de diciembre de 2022, esto es, dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 86 de la Ley N°20.529.



Sobre la proporcionalidad de la sanción, sostiene que la privación temporal y parcial de la subvención general de un 1% por dos meses es objetivamente proporcional, considerando que el sostenedor incurrió en una infracción grave tipificada en el artículo 76 letra c) de la Ley N°20.529, que se aplicó en un monto moderado, cercano al mínimo admitido, y que se tomaron en cuenta los criterios del artículo 73 letra b) inciso segundo de la misma ley.

Adicionalmente, señala que la entidad sostenedora fue sancionada anteriormente mediante Resolución Exenta N°0604 de fecha 29 de abril de 2022, configurándose la agravante del artículo 80 letra c) de la Ley N°20.529.

En virtud de lo expuesto, la Superintendencia de Educación solicita tener por informado el recurso de reclamación y, en definitiva, rechazarlo en todas sus partes, con expresa condenación en costas, por no adolecer el acto administrativo impugnado de vicio de ilegalidad alguno que justifique acoger las alegaciones sostenidas por el sostenedor.

**Tercero:** Que, en primer término, en cuanto al marco legal aplicable para el conocimiento de este recurso de reclamación, es dable señalar que aquél es de derecho estricto, en el que no se pueden modificar los presupuestos fácticos acreditados en sede administrativa, sino analizar la legalidad del actuar de la recurrida y si aquélla se encuentra conforme al ejercicio de sus facultades conforme a la legislación vigente.

En este orden, el inciso primero del artículo 85 de la Ley N° 20.529 dispone que *“Los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajustan a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de un plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto”*.

**Cuarto:** Que no existe controversia entre las partes que la decisión administrativa objeto del presente arbitrio dice relación con la Resolución Exenta PA N° 001464 de la Superintendencia de Educación, de 16 de diciembre de 2024, que acoge parcialmente el recurso de reclamación interpuesto por la Municipalidad de Santiago, en contra de la Resolución Exenta N° 2023/PA/13/3173 de 24 de octubre de 2023, del Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, rebajando la sanción impuesta por dicha Resolución, de privación temporal y parcial de la



subvención general de un 1% por tres meses, a una de privación temporal y parcial de la subvención general de ***un 1% por dos meses***; confirmando, de esta manera, los cargos formulados N°s 1 y 2.

**Quinto:** Que en lo tocante al cargo N° 1, se informa que el sostenedor no logró desvirtuar los hechos constatados por el fiscalizador, verificándose una infracción de carácter grave, de acuerdo lo preceptuado en el artículo 76 letra c) de la Ley N° 20.529, por lo que, hubo de confirmarse, toda vez, que no constan antecedentes que permitan comprender que los hechos constatados en el Acta de Fiscalización no son tales, y que el docente en cuestión, efectivamente cubrió con suficiencia las horas asignadas a su titularidad y al reemplazo que le fue asignado, sin que se hubiere expuesto el bien jurídico de la continuidad en la prestación del servicio educativo. Indica que el fiscalizador constató que la sostenedora asignó funciones de reemplazante a un docente que contaba con 30 horas cronológicas, sin embargo, no fue posible conocer la cantidad de horas que adquirió o bien, si fue respetado el máximo en las horas de aula dispuestas en la normativa educacional, lo que impide confirmar si la entidad docente mantuvo a los docentes suficientes para el cumplimiento de sus funciones, y que no se hubiese afectado la prestación de los servicios educativos.

**Sexto:** Que en cuanto al cargo N° 2, éste fue confirmado, por no haber desvirtuado el sostenedor los hechos constatados por el fiscalizador, verificándose con ello una infracción de carácter leve, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 20.529. Al efecto, reseña que en el Acta de Fiscalización, el hecho constatado fue que los servicios higiénicos no se encontraban en condiciones adecuadas ya que en el baño principal faltaba un lavamanos, un espejo y se encontraba rayado con grafitis, y en el de urinarios, faltaba un lavamanos, una llave, y la cerámica que los recubre se encontraba en mal estado. Sin embargo, aduce, que la reclamante, ante dicha Superintendencia solo presentó fotografías en las que se puede comprender que instaló pestillos en los que parecen ser los servicios higiénicos principales, entendiéndose aquello como una acción de corrección efectuada de manera posterior a la etapa de subsanación procesal, al igual que la reparación de dichos servicios, todo lo que no permitió tener por desvirtuados los hechos constatados en el Acta de Fiscalización, y por consiguiente llevó a la confirmatoria de este cargo.



**Séptimo:** Que corresponde aclarar, que, conforme a lo señalado precedentemente, la naturaleza del arbitrio incoado es de un recurso de reclamación, dado que la resolución recurrida corresponde a un acto administrativo, por lo que resulta improcedente la petición formulada en cuanto a rebajar la multa aplicada en la especie, todo ello además, de conformidad al principio de impugnabilidad, previsto en el artículo 15 de la Ley N° 19.880.

En efecto, la competencia de esta Corte está dada por la naturaleza del recurso de reclamación, en tanto control de legalidad, de manera que, para modificar la resolución dictada por la autoridad competente, se requiere dar por establecida la ilegalidad, invalidar el acto administrativo y disponer la decisión adecuada al caso, si procediere, conforme a los límites de su competencia.

De esta forma, el análisis se supeditarán a si la autoridad recurrida ha actuado dentro del marco regulatorio que le fijan la Constitución y la Ley, respetando las normas del debido proceso y si por su parte, la decisión se encuentra razonablemente fundada y ajustada a derecho, todo ello teniendo en consideración que los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, correspondiendo por tanto a la recurrente la hipótesis de que fuere desvirtuada.

**Octavo:** Que, así entonces, de acuerdo lo prescrito por el artículo 85 de la Ley N° 20.529, y de lo expuesto, se puede inferir que el reclamo establecido en esta norma dice relación con la circunstancia de ajustarse o no la resolución del Superintendente a la normativa educacional y, consecuentemente, sólo autoriza a la Corte para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto administrativo resolutorio, no encontrándose en consecuencia legalmente facultada para revisar aspectos de hecho ni los montos de las sanciones impuestas, salvo en cuanto excedieren de aquellos establecidos en la ley.

**Noveno:** Que, así las cosas, la revisión de legalidad que compete a esta Corte, se circunscribe al examen de algún vicio que pueda determinar la nulidad del acto administrativo impugnado, el que no puede fundamentarse en cuestiones de mérito.

En este sentido, entonces, conforme se ha venido relacionando, y teniendo en vista lo expuesto por las partes, y documentación acompañada, aparece que con motivo de una fiscalización de la Superintendencia de Educación cuya Acta de Fiscalización N° 221304380 de 22 de diciembre de 2022, constatando el seguimiento del acta original de fiscalización de 5 de diciembre de 2022, en la



que se había otorgado al establecimiento educacional un plazo para subsanar los hechos infraccionales, da cuenta que los mismos no fueron corregidos, por lo que, el 28 de diciembre de 2022, mediante Resolución Exenta N° 2022/PA/13/3164, se ordenó la instrucción del proceso administrativo sancionatorio al establecimiento educacional Liceo Manuel Barros Borgoño, de la comuna de Santiago, cuya entidad sostenedora es la Municipalidad de Santiago, designándose al Fiscal Instructor, quien el 8 de febrero de 2023, formuló los cargos impugnados a través del Acto Administrativo N° 2023/FC/13/0129, esto es:

*Cargo N° 1: “Establecimiento Educacional no acredita contar con el personal docente suficiente para sus estudiantes. Hecho constatado: "Se verifica que el establecimiento educacional cuenta con seis cursos 1° medio.... La profesora de lenguaje, AAAA, Rut: X1, la cual, ha presentado licencias médicas desde el 04-08-22 por 5 días, desde el 09-08-22 por 4 días, desde el 23-08-22 por 11 días, desde el 30-09-22 por 4 días, desde el 17-10-22 por 5 días, desde el 24-10-22 por 3 días, desde el 27-10-22 por 2 días, desde el 02-11-22 por 7 días, desde el 09-11-22 por 7 días y desde el 16-11-22 por 21 días, de acuerdo a lo señalado en Informe de la Municipalidad de Santiago, oficina de licencias médicas. De acuerdo con lo señalado por director, BBBB la funcionaria ha sido reemplazada por el docente CCCC, Rut: X2, que acredita título de Profesor de Estado de Castellano. Sin embargo, el liceo no presenta orden de trabajo que evidencie que el profesor cuenta con horas aula permitidas para realizar reemplazo. Por lo tanto, establecimiento educacional con planta docente incompleta desde el día 23-08-22 hasta el día 02-09-22, y desde el día 02-11-22 hasta la fecha, debido que establecimiento no acredita horas aula disponible por contrato de trabajo de docente CCCC para realizar reemplazo". Hecho que configura una eventual contravención a lo dispuesto en el artículo 10 letra f) inciso segundo y artículo 46 letra g), del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación; en el Capítulo 9.1 letra g) y 31.2 de la Circular N°1 de la Superintendencia de Educación.*

*Y, Cargo N° 2: “Establecimiento no cuenta con servicios higiénicos en condiciones adecuadas de funcionamiento. Hecho constatado: En atención a los hechos denunciados y de acuerdo con lo observado en los servicios higiénicos de los alumnos del establecimiento educacional, se pudo constatar que en el baño*



*principal falta un lavamanos, un espejo y se encuentra todo el servicio higiénico rayado con grafitis. En el baño que cuenta solo con urinarios falta una llave del lavamanos, el espejo completo y en la pared faltan dos palmetas de cerámicas, en los lavamanos exteriores faltan tres llaves de los lavamanos, falta un lavamanos y se encuentra en mal estado la cerámica que cubre los cuatro lavamanos. Se adjuntan fotografías de los dos baños de estudiantes del local escolar correspondientes al día de la visita de fiscalización. Cabe destacar que se observaron los servicios higiénicos sin vectores de interés sanitario. Con fecha 20/12/2022 DDDD abogada de la Subdirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Educación Municipal envía, por correo electrónico, fotografías de lavamanos del baño principal de estudiantes arreglado y correo electrónico de director, BBBB enviado a Doña DDDD con fecha 19-12-22, solicitando la compra de vidrios y pestillos. Por lo tanto, establecimiento no acredita haber subsanado las observaciones consignadas en acta de fiscalización N°221303723". Hecho que configura una eventual contravención a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 289, de 1989, del Ministerio de Salud, artículo 22 del Decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud.*

**Décimo:** Que la reclamante por una parte dirige su impugnación a dejar sin efecto la sanción aplicada -la que estima errónea- y por otra parte a la rebaja de la multa impuesta, en razón de la minorante de responsabilidad que estima concurrente, considerándola por lo demás desproporcionada.

**Undécimo:** Que, en cuanto a la normativa infringida se constató en la indagación practicada por la autoridad recurrida, el incumplimiento a la normativa sectorial, al verificar la efectividad de los cargos formulados. En efecto en cuanto al Cargo N° 1 y en consideración a que no se acompañaron antecedentes que permitieran acreditar que el establecimiento contara con una planta docente completa, se verificó una infracción a la normativa educacional en carácter grave, de conformidad a lo que dispone el artículo 76 letra c) de la Ley N° 20.529. Y en cuanto al Cargo N° 2, la autoridad estima una infracción de carácter leve, en virtud de lo previsto en el artículo 78 de la ley en comento.

**Duodécimo:** Que las normas citadas, dicen relación con los hechos verificados al tiempo de la fiscalización, lo que quedó anotado en el acta de seguimiento respectiva, en cuanto a los hechos constatados por los cargos N° 1 y 2, no siendo desvirtuadas las faltas anotadas, durante el proceso administrativo,





toda vez, que la sostenedora no acreditó suficientemente, en lo que atañe al cargo N° 1, que el docente observado hubiera cubierto con suficiencia las horas asignadas a su titularidad y al reemplazo que le fue asignado, cumpliendo con la continuidad en la prestación del servicio educativo. Y respecto del cargo N° 2, que hubiera subsanado los defectos observados en el Acta de Fiscalización dentro del plazo de subsanación, sino con posterioridad, adjuntando fotos a la reclamación presentada ante la Superintendencia de Educación, todo lo que fue validado por dicho organismo, y la Resolución impugnada, de 16 de diciembre de 2024, considerando las faltas antes anotadas.

En dicho orden de cosas, aparece que el tipo infraccional, respecto de los cargos formulados sí se configuró en la especie, pues la normativa aplicada resulta acorde y por tanto exigible a la reclamante.

**Décimo tercero:** Que en relación a la alegación de prescripción de la potestad sancionatoria, ha de considerarse lo previsto en el artículo 86 de la Ley N° 20.529, en relación con lo dispuesto en el Dictamen N° 1 de 2014 de la Superintendencia de Educación, y en el artículo 51 de la Ley N° 19.880, para establecer que el plazo de seis meses que determina el citado artículo 86, se suspende con la notificación del acto administrativo que ordena la instrucción del procedimiento y designa fiscal instructor. Atendido aquello, es que en este caso, respecto de los dos cargos, el inicio del plazo ha de contabilizarse desde la fecha del Acta de seguimiento de fiscalización, verificada el 22 de diciembre de 2022, de modo que, entre aquella data y el 28 de diciembre de 2022, fecha en que se ordena instruir el proceso administrativo, mediante Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0129, notificada el 29 de diciembre de 2022, no transcurrió el plazo de seis meses, lo que conduce a desestimar la alegación de prescripción planteada por la reclamante.

**Décimo cuarto:** Que en lo relativo a la falta de proporcionalidad en la sanción impuesta alegada por la reclamante, resulta menester señalar que la resolución impugnada, se encuentra debidamente fundada y ajustada a las normas legales que fueron descritas respecto de cada cargo, infracción que fue tipificada correctamente como grave, en los términos del artículo 76 letra c) de la Ley N° 20.529 y, que la pena aplicada se encuentra entre aquellas previstas en el artículo 73 letra b) del mismo cuerpo legal, sin embargo, la reclamada al ponderar los antecedentes de la reclamación administrativa, tuvo en cuenta la



corrección efectuada respecto del “Cargo N° 2”, y a pesar de dejar consignado que la entidad sostenedora era reincidente por cometer con anterioridad una infracción de carácter menos grave, relativa al mismo bien jurídico, -lo que implica la concurrencia de una agravante-, observó y ponderó como una acción de superación la rectificación de los defectos observados por el señalado cargo, concluyendo la rebaja de la sanción impuesta de privación temporal y parcial de la subvención por un 1% solo *por dos meses*, en lugar de tres como venía decidido en la resolución recurrida.

**Décimo quinto:** Que así las cosas, conforme lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley N° 20.529, la sanción resulta justificada en el marco de las normas educacionales transgredidas, en relación con los bienes jurídicos afectados, calificación que corresponde a la Superintendencia de Educación, en virtud de las facultades legales que como institución fiscalizadora le otorga el artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.832, en relación con lo estatuido en el artículo 49 letras l) y m) de la Ley N° 20.529.

Asimismo, resulta congruente, y proporcional la sanción aplicada por la autoridad, considerando, que de acuerdo lo prescribe el artículo 73 de la citada ley, para las infracciones de carácter grave, como se verificó en este caso, y los descargos que se sopesaron, ésta se determinó en forma adecuada a las vulneraciones constatadas.

**Décimo quinto:** Que, de conformidad a lo expuesto la resolución reclamada se ajusta a la normativa educacional, lo que conduce necesariamente al rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 85 de la Ley N° 20.529, **se rechaza** el recurso de reclamación interpuesto por la I Municipalidad de Santiago, sostenedora del Liceo Manuel Barros Borgoño, en contra de la Resolución Exenta PA N° 001464, de 16 de diciembre de 2024, de la Superintendencia de Educación, que acogió parcialmente el recurso de reclamación administrativo deducido respecto de la Resolución Exenta N°2023/PA/13/3173, de 24 de octubre de 2023, del Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana.

**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.**

**Ingreso Corte N° 10 -2025 Contencioso-Administrativo**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QWXJXTZRSKL

**Redacción de la Ministro señora Duran Madina**, quien no firma por estar haciendo uso de permiso administrativo.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Il. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QWXJXTZRSKL

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Suplente Paula Rodríguez F. y Abogado Integrante Cristian Parada B. Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QWXJXTZRSKL